

Santiago, veintinueve de junio de dos mil veintiuno.

Vistos:

En estos autos Rol N° 18.876-2018, por sentencia de primer grado de fecha diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, se condenó a los acusados **SERGIO HERIBERTO ÁVILA QUIROGA, HUGO IGNACIO GODOY ANDÍAS y JOSÉ LUIS CONTRERAS VALENZUELA**, a sufrir cada uno de ellos, la pena única de diez (10) años y un (1) día de presidio mayor en su grado mínimo, más las accesorias legales y al pago de las costas, como coautores de los delitos de homicidio calificado cometidos en las personas de Rolando Juan Rodríguez Cordero y Mauricio Jean Carrasco Valdivia, previstos y sancionados en el artículo 391 N°1 del Código Penal, ocurridos en Santiago el día 20 de octubre de 1976.

En lo civil, se resolvió acoger parcialmente las demandas civiles de indemnización de perjuicios deducidas en contra del Fisco de Chile, y se lo condenó a pagar por concepto de daño moral la suma de \$50.000.000 a cada uno de los demandantes, Alberto Aníbal Rodríguez Gallardo, María Rodríguez Gallardo y Marcos Gustavo Gallardo Valdivia, más reajustes de acuerdo con la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor desde la fecha del fallo hasta su entero y las costas de la causa.

Impugnada esa decisión por la vía de los recursos de casación en la forma y apelación, la Corte de Apelaciones de Santiago, por sentencia de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, desestimó los arbitrios de casación formal deducidos por la defensa de los encartados Hugo Ignacio Godoy Andías y José Luis Contreras Valenzuela, confirmando la indicada sentencia, con las siguientes declaraciones:



a) Que se rebaja a cinco (5) años y (1) día de presidio mayor en su grado mínimo, la pena privativa de libertad que se impone a los acusados **SERGIO HERIBERTO ÁVILA QUIROGA, HUGO IGNACIO GODOY ANDÍAS y JOSÉ LUIS CONTRERAS VALENZUELA**, como autores de los delitos de homicidio calificado cometidos en las personas de Rolando Juan Rodríguez Cordero y Mauricio Jean Carrasco Valdivia, previstos y sancionados en el artículo 391 N°1 del Código Penal, ocurridos en Santiago el día 20 de octubre de 1976.

b) Que las sumas que se condena pagar al Fisco de Chile a título de indemnización de perjuicios por daño moral a los actores civiles, don Alberto Aníbal Rodríguez Gallardo y doña María Rodríguez Gallardo, se eleva a la suma de \$100.000.000, para cada uno de ellos, más reajustes de acuerdo con la variación que experimente el índice de precios al consumidor desde que el presente fallo quede ejecutoriado o cause ejecutoria y hasta su pago

En contra de ese fallo la defensa de los condenados Hugo Ignacio Godoy Andías y José Luis Contreras Valenzuela, además del Fisco de Chile, formalizaron sendos recursos de casación en la forma y en el fondo, mientras que, por su parte, el letrado que representa al encartado Sergio Heriberto Ávila Quiroga, la Corporación de Asistencia Judicial, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, dedujeron sus respectivos arbitrios de casación en el fondo.

Con fecha seis de septiembre de dos mil dieciocho, se ordenó traer los autos en relación.

El nueve de febrero del año en curso, se acompañó a los autos el certificado de defunción del encausado José Luis Contreras Valenzuela, en el que



se da cuenta de su fallecimiento ocurrido con fecha veinticinco de diciembre de dos mil diecinueve, por lo que se omitirá pronunciamiento respecto del recurso de casación deducido a su respecto, remitiéndose los antecedentes a primera instancia para que se dicten las resoluciones que en derecho correspondan.

Considerando:

I.- Respecto de los arbitrios deducidos en contra de la parte penal del fallo impugnado.

1.- Recurso de casación en la forma del acusado Godoy Andías:

PRIMERO: Que, la defensa referido encartado, funda su arbitrio de casación formal en la causal novena del art. 541 del Código de Procedimiento Penal, relacionada con la inobservancia de lo prescrito en el N° 4 del art. 500 del mismo cuerpo legal.

Argumenta que, el tribunal de segunda instancia no se hizo cargo de las alegaciones contenidas en su recurso de apelación, limitándose a rechazar el arbitrio de casación en la forma que dedujo en contra del fallo de primer grado. Al efecto, refiere que el fallo recurrido nada argumentó respecto de la hipótesis planteada por la defensa en orden a que el actuar de sus representados fue lícito por cuanto se trató de una venta controlada de municiones y vestimenta institucional de Carabineros de Chile, técnica policial que hoy en día se conoce bajo el nombre de entrega vigilada y controlada.

SEGUNDO: Que, desde ya, cabe advertir que la sentencia impugnada, haciendo cargo de los planteamientos de la defensa del acusado Godoy Andías, en su motivo undécimo concluye: *“Que como primera cuestión fundamental se dirá por esta Corte que se comparte plenamente lo concluido por el tribunal a quo*



en el motivo Segundo y Tercero, en orden a que la prueba reunida durante la tramitación del proceso da cuenta de la ocurrencia del hecho descrito en ese acápite del fallo. Los antecedentes que se sintetizan en los fundamentos citados efectivamente permiten construir un conjunto de presunciones que reúnen las condiciones del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal y que, a su vez, forman la convicción que exige el artículo 456 bis del mismo cuerpo legal en orden a la existencia del hecho punible (...)

Así entonces, el veredicto impugnado sí se ocupa de analizar la defensa expuesta, pero en términos que no satisfacen al recurrente o le parecen inadecuados. Al respecto, cabe recordar que *“debe ser desestimado el recurso que no invoca la falta de las consideraciones exigidas por el nro. 4 del artículo 500 sino la falta de conformidad de tales consideraciones con el mérito del proceso; por cuanto esta última no constituye la causal 9ª que se hace valer ni autoriza el recurso de casación interpuesto”* (SCS, 07.06.1950, G. 1950, 1er. sem., nro. 55, p. 296).

La jurisprudencia ha sido consistente y reiterada en excluir de la causal de nulidad en comento *-que exige omisión, ausencia de consideraciones-* los desacuerdos de los recurrentes con las conclusiones de las sentencias. (SCS, 12.07.1961, R., T. 58, secc. 4ª, p. 175; SCS, 29.01.1982, R., T. 79, secc. 4ª, p.9). Muy claro es el razonamiento de esta Corte: *“lo que puede no corresponder o ser inadecuado para la defensa, puede serlo para los tribunales de la instancia, de manera que el reproche formulado a la sentencia no importa el incumplimiento de los requisitos 4º y 5º del artículo 500 del Código de Procedimiento Penal.”* (SCS, 17.06.1982, R., T. 79, secc.4ª, p.73).



Por todo lo argumentado, el recurso no puede prosperar.

2.- Recursos de casación en el fondo:

TERCERO: Que la defensa del encartado Godoy Andías dedujo, en primer término, recurso de nulidad sustancial fundado en la causal contenidas en el numeral 1° del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, en relación con el artículo 10 N°s 4 y 10 del Código Penal, toda vez que concurren en la especie las eximentes de responsabilidad de legítima defensa y/o de cumplimiento de un deber, ya que se trató en todo momento de un procedimiento totalmente ajustado a derecho.

Expone que los acusados han manifestado y reconocido que participaron en el grupo de efectivos del SICAR (Servicio de Inteligencia de Carabineros), liderados por el Mayor Pablo Navarrete, que intentaba lograr la detención de uno o más extremistas que pretendían adquirir municiones y vestimenta institucional y que, en base a lo anterior, confirman haber llegado con su patrulla al punto de encuentro donde se realizaría la transacción, lugar en el que las víctimas de autos advierten la presencia policial y lejos de detener su accionar, huyen del lugar sin antes haber realizado diversos disparos, los cuales afortunadamente no hirieron al personal de armas.

CUARTO: Que como segundo motivo de casación en el fondo el referido sentenciado denunció como infringido el artículo 546 N° 5 del Código de Procedimiento Penal, en relación con el art. 434, inc. 2°, del Código Penal, al haberse rechazado la excepción de prescripción de la acción penal, en cuanto los hechos ocurridos el 20 de octubre de 1976, no son lesivos o atentatorios a los derechos humanos, por lo que éstos se encuentran claramente prescritos.



Sostiene que la muerte de los ofendidos no es parte de un ataque sistemático o generalizado contra la población civil, ya sea por razones políticas o sociales, ni tampoco existe un atropello de los derechos fundamentales, ni menos un abuso del poder de las armas.

Finaliza solicitando que se declare que la sentencia es nula, dictándose una de reemplazo que absuelva a su representado de los cargos formulados en su contra.

QUINTO: Que, por su parte, la defensa del acusado Avila Quiroga, dedujo, en primer lugar, la causal de nulidad sustancial contemplada en el numeral 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, en relación con el artículo 488 N°s 1, 2, 3 y 4 del mismo cuerpo de normas.

Arguye que, lo cuestionado es el presupuesto que dice relación con que la Dipolcar planificó y ejecutó un plan para dar muerte a ambas víctimas, realizando además, una puesta en escena para aparentar un enfrentamiento, el cual según la sentencia, nunca existió. Pues bien *–argumenta el impugnante–* dicho establecimiento fáctico se pudo realizar por existir, según la sentencia, presunciones que reunían las características del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, situación que se demostrará no es tal.

Expone que lo cierto es que dicha tesis condenatoria, en cuanto a la existencia de un plan para la ejecución de las víctimas y la puesta en escena para darle apariencias de enfrentamiento, no se basa en prueba directa alguna. No existe testigo ni documento que permita probar dicha circunstancia. Todo lo contrario, y tal como lo explicita la sentencia de segundo grado, ello se construyó mediante presunciones y son dichas presunciones las que precisamente no



cumplen con las exigencias legales, ya que no se fundan en hechos reales y probados (N° 1) y no son múltiples (N° 2).

En efecto, de no haberse cometido tal infracción de las leyes reguladoras de la prueba, la sentencia definitiva de segunda instancia debió haber acogido la apelación interpuesta en contra de la sentencia definitiva de primera instancia, declarando que en los hechos, se configura la causal de justificación de cumplimiento de un deber, del artículo 10 N° 10 del Código Penal.

SEXTO: Que, como segunda causal de casación en el fondo, la defensa del encartado Ávila Quiroga, dedujo la prevista en el numeral 3° del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, en relación con los artículos 1, 10 N° 10 y 391 N° 1 del Código Penal, por cuanto los sentenciadores del grado han incurrido en un error de derecho al determinar la configuración de un delito de homicidio calificado *-cometido en perjuicio de Juan Rodríguez Cordero y Mauricio Carrasco Valdivia-*, desechando la alegación de la defensa en cuanto a que operaría en los hechos la causal del artículo 10 N° 10 del Código Penal, esto es, el que obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo.

Concluye solicitando que se anule la sentencia recurrida y, sin nueva vista, pero separadamente, se dicte una de reemplazo absolviendo a Sergio Avila Quiroga de los cargos formulados en su contra.

SÉPTIMO: Que, como causal común a los recursos de casación en el fondo interpuestos tanto por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (en lo sucesivo AFEP), como por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, aparece la prevista en el N° 1 del Artículo 546 del Código de



Procedimiento Penal, al aplicarse en beneficio de todos los condenados la circunstancia prevista en el artículo 103 del Código Penal y, al no aplicarse respecto de éstos, la regla de reiteración contenida en el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal.

En el mismo sentido, pero sólo respecto de la improcedencia de la media prescripción *-tratándose de delito de lesa humanidad-*, redunda el arbitrio de casación en el fondo interpuesto por la Corporación de Asistencia Judicial (en adelante CAJ).

Los impugnantes solicitan la nulidad del fallo y la dictación de una sentencia de reemplazo que eleve sustancialmente la pena privativa de libertad impuesta a cada condenado (CAJ); que se fije el marco punitivo de la pena privativa de libertad en la pena de presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo (AFEP) y; que se condene a los acusados a la pena de veinte años de presidio mayor en su grado máximo (Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior).

OCTAVO: Que previo al análisis de los recursos, es conveniente recordar que el tribunal del fondo ha tenido por demostrado que:

“Rolando Juan Rodríguez Cordero, de 31 años a la fecha de los hechos, y Mauricio Jean Carrasco Valdivia, de 25 años a la misma época, eran a la época en que ocurren los hechos, militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR; que, el día 20 de octubre de 1976, los antes mencionados se dirigen al sector de calle Los Plátanos con Las Dalias, de la comuna de Macul, para reunirse con un contacto, alumno de la Escuela de Suboficiales de Carabineros de Chile, quien les vendería un uniforme de dicha institución y municiones, sin embargo y



por la información proporcionada sobre este hecho por el propio contacto antes referido, personal de DIPOLCAR que manejaba esa información, se traslada al lugar para detenerlos en el momento de la “supuesta entrega”; que, para asegurar el operativo, el personal de la DIPOLCAR articula un montaje, que tuvo como finalidad no sólo detener a las víctimas, sino que también ejecutarlas, por cuanto se aparenta un falso enfrentamiento para justificar sus muertes; que, así las cosas, antes de las 19:00 horas del mismo día, Rodríguez Cordero y Carrasco Valdivia, mientras esperaban realizar el punto de encuentro y la transacción, funcionarios de DIPOLCAR se les acercan y les disparan, resultando herido Rolando Rodríguez Cordero, quien fallece posteriormente en el Hospital de Carabineros, por herida de bala tóraco abdominal con salida de proyectil, cuya trayectoria es de izquierda a derecha, de abajo arriba y muy levemente de atrás adelante, además de presentar dos heridas de bala transfixiantes, una en el miembro superior derecho y, la otra, en el miembro inferior izquierdo, ambas con salida de proyectiles, mientras que Mauricio Carrasco Valdivia muere en el lugar mismo de los hechos, a consecuencia de una herida a bala tóraco-abdominal reciente, con salida de proyectil y anemia aguda, disparo de corta distancia, cuya trayectoria intra corporal es de delante hacia atrás, de arriba hacia abajo y ligeramente de derecha a izquierda”.

Los sucesos así descritos fueron calificados por la sentencia como constitutivos del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en el artículo 391 N° 1 del Código Penal, pues quienes lo ejecutaron actuaron con alevosía y premeditación conocida, debidamente comprobadas en el proceso.



NOVENO: Que en lo que dice relación a la primera causal de nulidad sustancial invocada por el acusado Godoy Andías, esto es, la prevista en el numeral 1° del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, en relación con el artículo 10 N°s 4 y 10 del Código Penal, toda vez que concurrirían en la especie las eximentes de responsabilidad de legítima defensa y/o de cumplimiento de un deber, es preciso señalar que a través de la misma lo que se busca es incorporar hechos distintos de aquellos que han sido establecidos soberanamente por los juzgadores de la instancia.

Al efecto, el recurrente sostiene en su libelo que el acusado actuó en el marco de un procedimiento policial de venta controlada de municiones y vestimentas institucionales que, luego de ello, los ofendidos dispararon en contra de los funcionarios policiales, hipótesis fáctica que fue expresamente descartada por los juzgadores de la instancia, lo que por cierto lleva al rechazo del motivo de casación en el fondo en estudio, puesto que al no haberse denunciado como infringidas las normas reguladoras de la prueba, los hechos determinados por los juzgadores del grado permanecen inalterables y, en consecuencia, no pueden ser modificados por esta Corte al haberse interpuesto defectuosamente el recurso.

DÉCIMO: Que, por lo demás, el motivo de nulidad sustancial regulado en el numeral 1° del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, permite la invalidación cuando la sentencia, aunque califique el delito con arreglo a la ley, imponga al hechor una pena más o menos grave que la designada, con error de derecho, ya sea al determinar la participación que le ha cabido al delincuente, ya al calificar los hechos que constituyen circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes de su responsabilidad, ya por fin, al determinar la naturaleza y el grado



del castigo; lo que el recurrente sostiene por no concurrir los elementos necesarios para sancionarlo e insta, en definitiva, por su absolución.

En tales condiciones, el motivo de nulidad esgrimido no resulta procedente, ya que en su invocación se olvida que la causal aludida está dada para cuestionar sólo aquellos casos donde, si bien se acepta una participación culpable en el ilícito, se cree errada la calificación efectuada en la resolución objetada, como por ejemplo, si se ha considerado autor a quien únicamente debería conceptuársele cómplice o encubridor. La inexistencia de responsabilidad penal por falta de participación criminal del enjuiciado, la falta de comprobación del hecho punible o la extinción de la responsabilidad criminal no encuentran cabida en esta causal que, por ende, no habilita para solicitar la absolución, como lo persigue el desarrollo de sus apartados, conclusión que el propio tenor del precepto ratifica cuando expresa que el error de derecho denunciado debe haber conducido a imponer al justiciable una pena más o menos grave que la asignada en la ley, y así su ámbito tampoco puede extenderse a la hipótesis propuesta, motivo por el que también el acápite del recurso deducido por la referida defensa será desestimado.

Así, por lo demás, lo ha sostenido esta Corte en el pronunciamiento Rol N° 8945-2018, de 08 de febrero de 2021.

UNDÉCIMO: Que, en lo que dice relación a la segunda infracción de ley denunciada por el referido sentenciado –*la del artículo 546 N° 5 del Código de Procedimiento Penal, en relación con el art. 434, inc. 2°, del Código Penal*–, al haberse rechazado la excepción de prescripción de la acción penal, en cuanto en su parecer los hechos ocurridos el 20 de octubre de 1976, no son lesivos o



atentatorios a los derechos humanos, por lo que éstos se encontrarían claramente prescritos, es menester señalar que los sentenciadores del grado tuvieron en consideración, para calificar como constitutivos de un delito de lesa humanidad los hechos referidos en el motivo octavo del presente fallo, los siguientes fundamentos:

“En consecuencia, se debe entender por crimen de lesa humanidad los actos mencionados, como en este caso lo es la detención, sin previa orden y en la vía pública, y posterior desaparición, de un civil, supuestamente imputado de un delito común, que no fue sometido al conocimiento y resolución de tribunal competente alguno en el entendido de que estos delitos se cometieron como parte del ataque y abuso generalizado o sistemático en contra de la población civil, y en conocimiento sus autores de dicho ataque, y que ello constituyó una práctica habitual en los funcionarios, tanto de los organismos de inteligencia, como de las instituciones armadas y policiales, asimilable todo ello a lo que señala el artículo 7o del Estatuto de la Corte Penal Internacional, consagrado en nuestro concepto por el artículo 5° de la Constitución Política de la República” (Motivo decimocuarto del fallo de primera instancia, reproducido por el pronunciamiento de segunda instancia).

DUODÉCIMO: Que, esta Corte comparte la calificación efectuada por los falladores de la instancia, en orden a tratarse de un ilícito de lesa humanidad y, consecuentemente de un delito imprescriptible, toda vez que, como ya ha expresado este tribunal en diversos pronunciamientos (*entre ellos en el fallo Rol N° 33.75-2017, de 06 de agosto de 2018*), se trata de un ilícito efectuado en un contexto de violaciones a los derechos humanos graves, masivas y sistemáticas,



verificadas por agentes del Estado, constituyendo las víctimas un instrumento dentro de una política a escala general de exclusión, hostigamiento, persecución o exterminio de un grupo numeroso de compatriotas integrado por políticos, trabajadores, profesionales, adolescentes, menores y todo aquel que, en la época inmediata o posterior al 11 de septiembre de 1.973, se les sindicó la calidad de pertenecer ideológicamente al régimen político depuesto o que por cualquier circunstancia fuere considerado sospechoso de oponerse o entorpecer la realización de la construcción social y política ideada por los detentadores del poder.

DÉCIMO TERCERO: Que, en consecuencia, del tenor de lo expuesto y razonado, aparece que los jueces del fondo hicieron una correcta calificación del hecho que se dio por establecido en autos, al estimarlo como constitutivo de un ilícito de lesa humanidad, y de paso desestimar con ello la excepción de prescripción de la acción penal deducida por la defensa del encartado Godoy Andías, de lo que se colige que no se ha producido el segundo error de derecho denunciado por ésta, motivo por el cual la causal en análisis será también desestimada.

DÉCIMO CUARTO: Que, por su parte, la defensa del acusado Avila Quiroga, hizo valer como primer motivo de casación en el fondo, aquel previsto en el numeral 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, en relación con el artículo 488 N°s 1, 2, 3 y 4 del mismo cuerpo de normas, fundada en que no existe prueba testimonial ni documental alguna que permita probar la existencia de un plan para la ejecución de las víctimas y la puesta en escena para darle apariencias de un enfrentamiento, construyéndose tales hipótesis mediante



presunciones que no cumplen con las exigencias legales, ya que no se fundan en hechos reales y probados (N° 1) y no son múltiples (N° 2), por lo que, de no haberse cometido tal infracción de las leyes reguladoras de la prueba, la sentencia definitiva de segunda instancia debió declarar que en los hechos, se configura la causal de justificación de obrar en cumplimiento de un deber, contemplada en el artículo 10 N° 10 del Código Penal.

En su segundo acápite de nulidad sustancial denuncia la infracción del numeral 3° del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, en relación con los artículos 1, 10 N° 10 y 391 N° 1 del Código Penal, por cuanto los sentenciadores del grado harían incurrido en un error de derecho al determinar la configuración de un delito de homicidio calificado, desechando con ello la alegación de la defensa en cuanto a que operaría en los hechos la eximente de responsabilidad penal del antes aludido artículo 10 N° 10 del Código Penal.

DÉCIMO QUINTO: Que, en lo tocante a la infracción de las normas reguladoras de la prueba denunciada por el impugnante, es menester precisar que en lo que dice relación con en al art. 488 del código del ramo, sólo el numeral 1° y el numeral 2°, primera parte, constituyen leyes reguladoras cuya correcta aplicación puede ser revisada por la vía del recurso en comento.

Se afirma en el arbitrio procesal, que los jueces construyeron sus conclusiones mediante *“presunciones que no cumplen con las exigencias legales”*. Además, se les imputa errar al presumir que existió un enfrentamiento utilizando *“como elemento de cargo el hecho que no se hayan realizado pericias a las armas, que no se hubiese decretado un levantamiento del sitio del suceso y que no se hubiesen otorgado órdenes para buscar testigos”*



De los párrafos transcritos del recurso se desprende claramente que, en vez de una genuina vulneración de determinadas leyes reguladoras de las probanzas, cuya infracción resulta comprobada en los autos, se postula una discordancia o discrepancia con la valoración o justipreciación efectuada por los jueces de los medios de prueba reunidos en el proceso, discrepancia que, según jurisprudencia uniforme de este Tribunal, recordada en este mismo fallo, no configura la causal esgrimida. Se ha declarado recientemente por esta Sala, con respecto al ya mencionado art. 488, que éste establece una limitación a las facultades de los jueces del fondo para dar por probados los hechos litigiosos a través del uso de presunciones judiciales: *“Por ello, un correcto y competente examen respecto de esta infracción importa respetar la prohibición que tiene esta Corte de adentrarse en un nuevo análisis de la ponderación realizada por los jueces del grado, pues dicho ámbito escapa al control de esta magistratura, ya que de realizarlo se volvería a examinar y valorar los antecedentes probatorios que ya fueron apreciados, además de revisar las conclusiones a que aquellos arribaron, lo que está vedado, pues desnaturaliza el arbitrio en estudio, el que debe fundarse exclusivamente en asuntos de derecho”* (SCS, Rol N° 33.997-16, de 13 de octubre 2016, y Rol N° 8945-18, 08 de febrero de 2021).

La desestimación del motivo de nulidad previsto en el numeral 7° del art. 546 del Código de Procedimiento Penal, acarrea, indefectiblemente y de conformidad a la propia estructuración del recurso, el rechazo de la causal del nro. 3° del estatuto procesal, en cuanto la pretensión de la defensa *-en orden a tener por configurada la causal de justificación de obrar en cumplimiento de un deber-*



se estructuraba sobre la base de modificar los hechos asentados por los juzgadores de la instancia.

DÉCIMO SEXTO: Que, en lo tocante a la alegación tanto de la AFEP como del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, relativa a la inaplicación por parte de los sentenciadores de la instancia de la regla de reiteración contenida en el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal, es preciso referir, en primer término, que dicha alegación no fue sostenida por los antes referidos intervinientes en sus acusaciones particulares de fojas 1140 y 1151, respectivamente.

Luego, al apelar del sentencia de primer grado, para fundar el yerro cometido en su dictación sostuvieron que dicho pronunciamiento condenó a los acusados como coautores de *“dos crímenes de misma especie”*, como se lee a fojas 2046, en el arbitrio deducido por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y; que los encartados *“cometieron dos delitos de homicidio calificado”*, conforme consta a fojas 2052, en la apelación de la AFEP.

Pues bien, es preciso señalar que el fallo de primera instancia condenó a los acusados como coautores del delito de homicidio calificado de Rolando Juan Rodríguez Cordero y Mauricio Jean Carrasco Valdivia, es decir, calificó los hechos como un único delito, conclusión que fue ratificada por la sentencia en revisión.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, conforme lo antes expuesto, la causal de nulidad sustancial en análisis no podrá prosperar, por cuanto la misma exige que la sentencia impugnada *“aunque califique el delito con arreglo a la ley, imponga al delincuente una pena más o menos grave que la designada en ella”*, justamente lo



contrario a lo sostenido por los impugnantes, en cuanto éstos difieren de la calificación jurídica que de los hechos efectuaron los falladores de la instancia.

DÉCIMO OCTAVO: Que, finalmente, corresponde hacerse cargo del motivo de nulidad previsto en el N° 1 del Artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, en relación con el artículo 103 del Código Penal, sostenido tanto por la AFEP, como por la CAJ y por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, fundada en la errónea aplicación de la minorante de la prescripción gradual en beneficio de todos los condenados.

DÉCIMO NOVENO: Que, sobre el particular, conviene tener presente que en la especie nos encontramos frente a un hecho que fue calificado como constitutivo de un delito de lesa humanidad, concepto que, con el transcurso del tiempo, ha dado lugar a normas de derecho consuetudinario, es decir, a principios generales del derecho, con independencia de su consagración en tratados internacionales propios del tema. Así, entonces, se advierten como conductas prohibidas en términos absolutos, constituyen normas imperativas o *ius cogens* y, por supuesto, obligatorias para toda la humanidad, corresponden a normas del derecho internacional general, inexcusables y vinculantes, que no pueden derogarse sino por una norma de la misma entidad.

En el mismo sentido, debe tenerse presente que por Decreto Ley N° 3, de 11 de septiembre de 1973, se estableció el estado de sitio por “*conmoción interna*”, concepto que, posteriormente, es fijado por el Decreto Ley N° 5, de 12 de septiembre de 1973, y en éste se señala que el estado de sitio por *conmoción interna* debe entenderse como “*Estado o Tiempo de Guerra*” para la aplicación de la penalidad y todos los demás efectos; que, estos amplios efectos abarcan



también las circunstancias eximentes, atenuantes, agravantes, y las de extinción de responsabilidad; que, este estado se mantuvo hasta el 11 de septiembre de 1974, en que se dictó el Decreto Ley N° 641, que estimó innecesario mantener la declaración de guerra interna, señalando que todo el territorio de la República se encontraba en Estado de Sitio, en grado de defensa interna, por el plazo de seis meses, plazo que se renovó por otros seis meses, por el Decreto Ley N° 1.181, de 10 de septiembre de 1975, que declaró que el país se encontraba en “*estado de sitio, en grado de seguridad interior*”; que, en consecuencia, el Estado o Tiempo de Guerra, rigió al menos hasta el 10 de septiembre de 1975, fecha que hace aplicable los Convenios de Ginebra de 1949, ratificados por Chile y publicados en el Diario Oficial el 17 de abril de 1951; que, así, encontrándose vigentes y con plena validez los Convenios de Ginebra de 1949, se hace aplicable su artículo 3°, relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra, que obliga a los Estados contratantes, en caso de conflicto armado sin carácter de internacional, ocurrido en su territorio (*que es justamente la situación de Chile durante el período comprendido entre el 12 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1975*), al trato humanitario, incluso de contendientes que hayan abandonado sus armas, sin distinción alguna de carácter desfavorable, prohibiéndose, para cualquier tiempo y lugar, entre otros: a) los atentados a la vida y a la integridad corporal, y b) los atentados a la dignidad personal.

Asimismo, ese instrumento internacional consigna, en su artículo 146, el compromiso de sus suscriptores para tomar todas las medidas legislativas necesarias en orden a fijar las adecuadas sanciones penales que hayan de aplicarse a las personas que cometen, o den orden de cometer, cualquiera de las



infracciones graves definidas en el Convenio, como también a buscar a tales personas, debiendo hacerlas comparecer ante sus propios tribunales y tomar las medidas necesarias para que cesen los actos contrarios a las disposiciones del Acuerdo, que en su artículo 147 describe lo que se entiende por infracciones graves, a saber, entre ellas, el homicidio intencional, torturas o tratos inhumanos, atentar gravemente a la integridad física o la salud, las deportaciones y traslados ilegales, y la detención ilegítima.

En consecuencia, el Estado de Chile se impuso, al suscribir y ratificar los citados Convenios, la obligación de garantizar la seguridad de las personas que pudieren tener participación en conflictos armados dentro de su territorio, especialmente, si fueren detenidas, quedando vedadas las medidas tendientes a amparar los agravios cometidos contra personas determinadas o lograr impunidad de sus autores, teniendo especialmente presente que los acuerdos internacionales deben cumplirse de buena fe y, en cuanto el Pacto persigue garantizar los derechos esenciales que nacen de la naturaleza humana, tiene aplicación preeminente, puesto que esta Corte, en reiteradas sentencias, ha reconocido que la soberanía interna del Estado de Chile reconoce su límite en los derechos que emanan de la naturaleza humana, valores que son superiores a toda norma que puedan disponer las autoridades del Estado, incluido el propio Poder Constituyente, lo que impide que sean desconocidos y, menos aún, vulnerados.

VIGÉSIMO: Que, en consecuencia, la aplicación de la figura de la media prescripción o prescripción gradual de la pena, contemplada por el artículo 103 del Código Penal, no es admisible tratándose de ilícitos de lesa humanidad, toda vez que la calificación antes aludida obliga a considerar la normativa del Derecho



Internacional de los Derechos Humanos, que excluye la utilización tanto de la prescripción total como de la llamada media prescripción, por entender tales institutos estrechamente vinculados en sus fundamentos y, consecuentemente, contrarios a las regulaciones de ius cogens provenientes de esa órbita del Derecho Penal Internacional, que rechazan la impunidad y la imposición de penas no proporcionadas a la gravedad intrínseca de los delitos, fundadas en el transcurso del tiempo.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, así las cosas, al haber acogido por los sentenciadores de la instancia, la minorante de la media prescripción o prescripción gradual de la pena respecto de los acusados, se ha incurrido en un error de derecho que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, en cuanto su aplicación les permitió hacer una rebaja de la pena a imponer, en un caso no permitido por la ley, motivo por el cual los recursos de casación el fondo en estudio serán acogidos en lo que dice relación con la presente causal.

I.- Respecto de los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos por el Fisco de Chile en contra de la sección civil del fallo impugnado.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que el Consejo de Defensa del Estado, funda su arbitrio de casación formal en la causal del N° 5 del art. 768 del Código de Procedimiento civil, relacionada con la inobservancia de lo prescrito en el N° 5 del art. 170 del mismo cuerpo legal, toda vez que en la sentencia recurrida se omitieron las consideraciones de hecho y de derecho que permitieron el monto de las indemnizaciones determinadas en favor de los actores civiles.



VIGÉSIMO TERCERO: Que, para los efectos de desestimar la causal de nulidad formal hecha valer por la parte civilmente demandada, basta con señalar que el fallo de segundo grado hizo suyos –*para los efectos de determinar el monto de los perjuicios sufridos por los demandantes*- todos los fundamentos explicitados por la sentencia de primera instancia, lo que implica necesariamente que su decisión, en orden a elevar los montos de las indemnizaciones, se encuentra debidamente motivada.

VIGÉSIMO CUARTO: Que, enseguida, el representante del Fisco de Chile dedujo recurso de casación en el fondo asilado en el artículo 546 inciso final Código de Procedimiento Penal, en relación con los artículos 764, 767 y 770 del Código de Procedimiento Civil.

En primer término alega la contravención a los artículos 17 a 27 de la Ley N° 19.123 y 19 y 22 inciso primero del Código Civil, al rechazarse la excepción de preterición legal de los demandantes y la de reparación “satisfactiva” opuesta.

Explica el recurso que la normativa que regula esta materia, reconoce como beneficiarios a quienes son y fueron los directamente afectados por casos de violaciones a los derechos humanos. Por ende, muchas de las negociaciones acordadas por el Estado privilegian a ciertos grupos en desmedro de otros cuyos intereses se estiman más lejanos. En dicho escenario, la Ley N° 19.123 compatibilizó el reparar económicamente a los familiares más directos mediante prestaciones en dinero, preferentemente en cuotas mensuales, lo que permitió y permite a numerosas víctimas que, mes a mes, obtengan una reparación, sin que el Estado deje de cumplir con sus otras obligaciones de interés público. Para que este mecanismo fuere viable, se optó por el núcleo familiar más cercano, es decir,



padres, hijos y cónyuge, pretiriendo al resto de las personas ligadas por vínculo de parentesco, de amistad o de cercanía. En consecuencia, quedaron excluidos de tal reparación quienes no fueron designados, como en la especie, los hermanos del causante.

Por el siguiente apartado se denuncia la falsa aplicación de los 41 del Código de Procedimiento Penal 2332, 2492, 2497, 2514 del Código Civil y las normas de interpretación de los artículos 19 y 22 inciso primero del referido cuerpo de leyes, al prescindir el fallo de la regulación contenida en el derecho interno a propósito de la prescripción de la acción civil ejercida. Indica el recurso, que no existe en nuestra legislación norma de fuente nacional o internacional que establezca la imprescriptibilidad de la acción intentada, término que es de cuatro años, como establece el artículo 2332 del Código Civil.

Plantea que, en el caso que se revisa, los hechos ocurrieron el 20 de octubre de 1976 y la demanda se notificó el 12 de enero de 2016, vale decir, la prescripción se produjo incluso si se considera que su curso estuvo suspendido durante todo el período que se inició con el régimen militar instaurado el 11 de septiembre de 1973, hasta el retorno de la democracia, el 11 de marzo de 1990, y aun hasta el 4 de marzo de 1991, fecha en que la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación entregó oficialmente su informe sobre los casos de violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país durante el mismo período.

En último término se reclama la falsa aplicación de las normas de derecho internacional de los Derechos Humanos que no contemplan la imprescriptibilidad de las acciones patrimoniales *—en particular, artículos 74 N° 2 de la Convención*



Americana sobre Derechos Humanos, 28 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, y 6 y 9 del Código Civil-.

Para estos efectos explica que la sentencia extendió indebidamente la imprescriptibilidad prevista para la persecución penal de los responsables de delitos de esta naturaleza al ámbito patrimonial. Pero no se cita por el fallo ninguna disposición de algún tratado internacional suscrito y vigente en Chile que establezca dicha imprescriptibilidad para el caso del ejercicio de acciones pecuniarias provenientes de violaciones a los derechos humanos. En consecuencia, a falta de norma expresa de derecho internacional debidamente incorporada a nuestro ordenamiento interno, la sentencia no debió apartarse de los artículos 2332 y 2497 del Código Civil y declarar prescrita la acción ejercida.

Con dichos argumentos solicita que se anule la sentencia impugnada, en su sección civil, a fin que, en su reemplazo, se resuelva desechar íntegramente la acción intentada.

VIGÉSIMO QUINTO: Que, en lo que atañe al recurso de casación en el fondo promovido por el Fisco de Chile caben las siguientes reflexiones.

En cuanto a la prescripción, reiterada jurisprudencia de esta Corte ha señalado que en el caso de delitos de lesa humanidad, lo que ha sido declarado en la sentencia, en que la acción penal persecutoria imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción contenidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional de acuerdo con el inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las



víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno, que en virtud de la Ley N° 19.123 reconoció de manera explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de las víctimas de violación a los derechos humanos en el período 1973-1990, comprendidos en los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, beneficios de carácter económico o pecuniario (*En este sentido, SCS Roles N° 1.424-2013, de 1 de abril de 2014, N° 20.288-14, de 13 de abril de 2015 y; N° 33.750, de 06 de agosto de 2018*).

Por consiguiente, cualquier pretendida diferenciación en orden a dividir ambas acciones y otorgarles un tratamiento diverso resulta discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad que se le reclama.

Entonces, pretender aplicar las disposiciones del Código Civil a la responsabilidad derivada de crímenes de lesa humanidad, posibles de cometer con la activa colaboración del Estado, como derecho común supletorio a todo el ordenamiento jurídico, hoy resulta improcedente.

Por otra parte, la reparación integral del daño no se discute en el ámbito internacional y no sólo se limita a los autores de los crímenes, sino también al mismo Estado. La normativa internacional no ha creado un sistema de responsabilidad, lo ha reconocido, desde que, sin duda, siempre ha existido, evolucionando las herramientas destinadas a hacer más expedita, simple y eficaz su declaración, en atención a la naturaleza de la violación y del derecho quebrantado.



VIGÉSIMO SEXTO: Que en la situación sub lite, dado el contexto en que el ilícito fue verificado, con la intervención de agentes del Estado, trae no sólo aparejada la imposibilidad de declarar la prescripción de la acción penal que de ellos emana sino que, además, la inviabilidad de proclamar la extinción *-por el transcurso del tiempo-* del eventual ejercicio de las acciones civiles indemnizatorias derivadas de los delitos que se han tenido por acreditados.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, por lo demás, las acciones civiles entabladas por las víctimas en contra del Fisco, tendientes a conseguir la reparación íntegra de los perjuicios ocasionados, encuentra su fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su consagración normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado a reconocer y proteger este derecho a la reparación completa, en virtud de lo ordenado en los artículos 5°, inciso segundo, y 6° de la Constitución Política de la República.

Los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos consagran que la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de derecho interno, pues si se verifica un hecho ilícito imputable a un Estado surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una regla internacional, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias del agravio.

VIGÉSIMO OCTAVO: Que esta preceptiva impone un límite y un deber de actuación a los poderes públicos, y en especial a los tribunales nacionales, en



tanto éstos no pueden interpretar las normas de derecho interno de un modo tal que dejen sin aplicación las disposiciones de derecho internacional que consagran este derecho a la reparación, pues ello podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado de Chile.

Por esta razón no resultan aplicables para estos efectos las reglas del Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios, como pretende el recurso, toda vez que contradicen lo dispuesto en la normativa internacional de superior jerarquía.

VIGÉSIMO NOVENO: Que, de otra parte, la indemnización del daño producido por el delito y la acción para hacerla efectiva, de máxima trascendencia al momento de administrar justicia, compromete el interés público y aspectos de justicia material, todo lo cual condujo a acoger las acciones civiles formalizadas en autos, cuyo objeto radica en la reparación íntegra de los perjuicios ocasionados por el actuar de agentes del Estado de Chile, ya que así lo demanda la aplicación de buena fe de los tratados internacionales suscritos por nuestro país y la interpretación de las disposiciones de derecho internacional consideradas *ius cogens* por la comunidad jurídica internacional. Sus preceptos deben recibir aplicación preferente en nuestro ordenamiento interno, al tenor de lo estatuido en el artículo 5° de la Constitución Política de la República, por sobre aquellas disposiciones de orden jurídico nacional que posibilitarían eludir las responsabilidades en que ha incurrido el Estado chileno, a través de la actuación penalmente culpable de sus funcionarios, y así acata la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados.



TRIGÉSIMO: Que, además, cabe tener en consideración que el sistema de responsabilidad del Estado deriva también de los artículos 6°, inciso tercero, de la Constitución Política de la República y 3° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, las que, de aceptarse la tesis del recurso, quedarían inaplicadas.

TRIGÉSIMO PRIMERO: Que, por último, sobre la supuesta preterición legal en relación a la demanda entablada por el hermano de una de las víctimas, cada vez que se ha optado por establecer un orden legal respecto de beneficios o posibilidades de accionar existen disposiciones expresas que así lo resuelven, lo que en la especie no sucede, pues la única limitante que tienen quienes reclaman un daño sufrido como consecuencia del actuar de agentes del Estado es demostrar la existencia de dicho detrimento, de manera que formalmente basta con alegar la existencia del daño y la relación con la víctima para plantear la pretensión, lo que en este caso no ha sido cuestionado.

TRIGÉSIMO SEGUNDO: Que por las consideraciones precedentes ninguno de los capítulos comprendidos en el recurso formulado por el Fisco de Chile puede prosperar.

Y de conformidad asimismo con lo que disponen los artículos 541, 544, 546 y 547 del Código de Procedimiento Penal, se declara que **SE RECHAZAN** los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos por la defensa del sentenciado Hugo Ignacio Godoy Andías y por el Fisco de Chile, así como también el recurso de nulidad sustancial interpuesto por el letrado que representa al encartado Sergio Heriberto Ávila Quiroga; y que **SE ACOGEN** los recursos de casación en el fondo presentados por la Corporación de Asistencia Judicial, por el



Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (*estos dos últimos parcialmente, sólo en lo tocante a la media prescripción*), en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, la que en consecuencia es nula –*únicamente en lo que dice relación con la aplicación de la minorante de la prescripción gradual respecto de los acusados*-, y se la reemplaza por la que a continuación se dicta.

Acordada la decisión civil con el voto en contra de la Abogado Integrante Sra. Coppo, quien fue del parecer de acoger el recurso deducido por el Fisco de Chile, invalidar el fallo de alzada y consecuencialmente, en la sentencia de reemplazo, revocar el pronunciamiento de primer grado y desestimar la demanda por las siguientes consideraciones:

1º Que la institución de la prescripción busca consolidar, más que la justicia, la seguridad y estabilidad en las relaciones jurídicas, bases en que se asienta la convivencia civilizada. En esa orientación, existe amplio consenso en orden a reconocerla como un principio general del derecho, de modo tal que atento el vacío del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que no la delimita en el ámbito civil, como sí lo hace en el penal, no cabe sino concluir que la admite tácita o implícitamente, pues de lo contrario no habría restringido su alcance a sólo este último aspecto. Lo anterior, teniendo especialmente presente que constituyendo la prescriptibilidad de todas las obligaciones civiles la regla general, cualquiera excepción debería ser establecida explícitamente.

2º Que la acción civil de indemnización de perjuicios deducida pertenece al ámbito patrimonial pues su contenido es completamente pecuniario desde que su



finalidad no es otra, en términos simples, que hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, encontrándose por tanto regida por el Derecho Civil, pues, como se dijo, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos -que establece la imprescriptibilidad de la acción penal derivada de esa clase de delitos-, no excluye la aplicación del derecho nacional sobre la materia, particularmente las reglas contenidas en los artículos 2497 y 2332 del Código Civil, que regulan la institución de la prescripción en el área de la responsabilidad civil extracontractual, que es la que se debate en este caso.

Asimismo, la prescripción, en concepto de esta disidente, no es ajena al derecho público y la regla general es que las acciones sean prescriptibles, requiriéndose de norma legal expresa que declare lo contrario sin que se divise la razón de excluir tal certidumbre en las relaciones de los particulares con la administración. Por lo demás, el artículo 2497 del Código Civil, consagra que la prescripción corre por igual a favor y en contra de toda clase de personas, contemplando al Estado, expresamente entre quienes se encuentran sujetos a sus reglas.

3º Que dado que la acción de indemnización de perjuicios ejercida es de contenido patrimonial y que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, dicha pretensión se rige por las disposiciones legales contempladas en el Título XXXV del Libro IV del Código Civil, entre éstas el artículo 2332, que indica que las acciones para hacer efectiva la responsabilidad civil por daño o dolo prescribe en el plazo de cuatro años, contados desde la perpetración del acto.



4° Que, sin embargo, atendida las especiales circunstancias en que se perpetraron los delitos de los cuales emana la acción civil deducida en este juicio, la aplicación de las normas sobre prescripción de la responsabilidad civil extracontractual deben admitir que el plazo de cómputo correspondiente es susceptible de contarse desde una época inicial distinta de la que establece el artículo 2332 del Código Civil. Ello, porque tratándose de un caso como el de autos es posible sostener que los titulares de la acción indemnizatoria no estaban en condiciones de haberla ejercido en tanto no tenían certeza jurídica en orden a que la persona que experimentó el daño que es causa de la indemnización que se demanda, tenía la calidad de víctima de un delito de lesa humanidad y, por lo mismo, no parece razonable computar el término legal de prescripción sino desde que dichos titulares tuvieron ese conocimiento y contaron con la información necesaria y pertinente para hacer valer ante los tribunales de justicia el derecho al resarcimiento por el daño sufrido que el ordenamiento les reconoce. Ello, es sabido, ocurrió años después, pero aun así, el plazo de cuatro años que contempla el artículo 2332 del Código Civil, al tiempo de notificarse válidamente la demanda al demandado Fisco de Chile, se encontraría, en todo caso, cumplido y, consecuentemente, extinguida la vía civil intentada.

5° Que todas estas reflexiones lleva a esta disidente a concluir que al rechazar la excepción de prescripción opuesta por el Fisco de Chile el a quo incurrió en el error de derecho que se le imputa en el recurso por cuanto incidió en la decisión de hacer lugar a la demanda de indemnización de perjuicios por concepto de daño moral interpuesta, en circunstancias que ésta debió haber sido desestimada.



Regístrese.

Redacción del Ministro Sr. Brito, y de la disidencia, su autora.

Rol N° 18.876-2018.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., el Ministro Suplente Sr. Jorge Zepeda A., y las Abogadas Integrantes Sras. Pía Tavolari G., y Carolina Coppo D. No firma la Abogada Integrante Sra. Coppo, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ausente.

HAROLDO OSVALDO BRITO CRUZ
MINISTRO
Fecha: 29/06/2021 13:56:08

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 29/06/2021 13:56:08

JORGE LUIS ZEPEDA ARANCIBIA
MINISTRO(S)
Fecha: 29/06/2021 13:48:15

PIA VERENA TAVOLARI GOYCOOLEA
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 29/06/2021 13:56:09



Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

JORGE EDUARDO SAEZ MARTIN
MINISTRO DE FE
Fecha: 29/06/2021 19:30:47

En Santiago, a veintinueve de junio de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

JORGE EDUARDO SAEZ MARTIN
MINISTRO DE FE
Fecha: 29/06/2021 19:30:48



Santiago, veintinueve de junio de dos mil veintiuno.

Vistos:

De la sentencia en alzada se suprime únicamente, en su considerando vigésimo sexto, párrafo final, la frase “*cada uno de los demandantes de autos, Alberto Aníbal Rodríguez Gallardo, María Rodríguez Gallardo, y*”.

Asimismo, de la sentencia de casación se reproducen sus motivos undécimo a décimo tercero, décimo noveno a vigésimo primero y; vigésimo quinto a trigésimo primero.

Y teniendo en su lugar y además presente:

PRIMERO: Que, el nueve de febrero del año en curso, se acompañó a los autos el certificado de defunción del encausado José Luis Contreras Valenzuela, en el que se da cuenta de su fallecimiento ocurrido con fecha veinticinco de diciembre de dos mil diecinueve.

SEGUNDO: Que de acuerdo con el mérito de los antecedentes el daño moral sufrido por don Alberto Aníbal Rodríguez Gallardo y doña María Rodríguez Gallardo, en su calidad de hijos de una de las víctimas de autos, don Rolando Juan Rodríguez Cordero, se encuentra acreditado en virtud de los testimonios rendidos al efecto durante el curso del término probatorio de autos, los que dan cuenta del natural dolor, angustia y menoscabo moral que, inequívocamente, han generado las violentas muertes investigada en autos, resultando razonable aceptar que los referidos actores han debido soportar fuertes sentimientos de impotencia, incompreensión, soledad, temores y aflicciones por la muerte de su padre, circunstancias que permiten considerar que deben ser reparados en el daño moral que se les ha causado.



TERCERO: Que, en consecuencia, habiéndose producido el fallecimiento del padre de los demandantes Alberto Aníbal Rodríguez Gallardo y María Rodríguez Gallardo, cuando aquel tenía apenas treinta y un años, sus hijos debieron crecer *–desde muy temprana edad–* sin la presencia de su padre, con todas la carencias afectivas, emocionales y económicas que ello conlleva, motivos por el cual el monto de indemnización que se fijara respecto de cada uno de los demandantes será el cien millones de pesos (\$ 100.000.000.-), suma que deberá reajustarse conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor, desde que la sentencia quede firme y ejecutoriada, y con más los intereses que se generen desde que la demandada se constituya en mora.

CUARTO: Que, en lo que dice relación con el quantum de la pena a aplicar a los acusados Ávila Quiroga y Godoy Andías, esta Corte comparte los razonamientos vertidos por el fallo en alzada en su motivo décimo séptimo, toda vez que al descartarse la aplicación del artículo 103 del Código Penal a su respecto, la misma *–una vez analizadas las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal concurrentes–* se encuentra correctamente determinada en el rango del presidio mayor en su grado medio.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 509 y siguientes del Código del Procedimiento Penal y 183 y siguientes del Código de Procedimiento Civil se decide:

I.- Se confirma la sentencia apelada de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, **con las siguientes declaraciones:**



i).- Que el fallecido acusado José Luis Contreras Valenzuela no queda condenado en estos autos, remitiéndose los antecedentes a primera instancia para que se dicten las resoluciones que en derecho correspondan y;

ii).- Que, los montos que se condena pagar al Fisco de Chile a título de indemnización de perjuicios por daño moral a los actores civiles, don Alberto Aníbal Rodríguez Gallardo y doña María Rodríguez Gallardo, se elevan a la suma de \$100.000.000, para cada uno de ellos, más reajustes de acuerdo con la variación que experimente el índice de precios al consumidor desde que el presente fallo quede ejecutoriado o cause ejecutoria y hasta su pago.

Acordada la decisión civil con el voto en contra de la Abogada Integrante Sra. Coppo, quien fue del parecer de revocar el pronunciamiento de primer grado y desestimar, en su totalidad, las demandas civiles interpuestas en autos, en virtud de las consideraciones esbozadas en su disidencia incorporada al fallo de casación, las que se dan por íntegramente reproducidas.

Cúmplase con lo dispuesto en el artículo 509 bis del Código de Procedimiento Penal.

Regístrese y devuélvase, con sus Tomos I a V.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Brito y de la disidencia, su autora.

Rol N° 18.876-2018

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., el Ministro Suplente Sr. Jorge Zepeda A., y las Abogadas Integrantes Sras. Pía Tavolari G., y Carolina Coppo D. No firma la



Abogada Integrante Sra. Coppo, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ausente.

HAROLDO OSVALDO BRITO CRUZ
MINISTRO
Fecha: 29/06/2021 13:56:10

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 29/06/2021 13:56:11

JORGE LUIS ZEPEDA ARANCIBIA
MINISTRO(S)
Fecha: 29/06/2021 13:48:15

PIA VERENA TAVOLARI GOYCOOLEA
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 29/06/2021 13:56:11



Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

JORGE EDUARDO SAEZ MARTIN
MINISTRO DE FE
Fecha: 29/06/2021 19:30:49

En Santiago, a veintinueve de junio de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

JORGE EDUARDO SAEZ MARTIN
MINISTRO DE FE
Fecha: 29/06/2021 19:30:49

